



Poder Judicial de la Nación

Reg. Interno N° /2023

INCIDENTE DE EXTINCIÓN DE LA ACCIÓN PENAL DE GERMÁN ALBERTO FERRANDO EN AUTOS: “DOMANICO, DIEGO ARNALDO Y OTROS SOBRE INFRACCIÓN LEY 24.769”.

CPE 32/2017/23/CA11. Orden N° 34.037. Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9. Secretaría N° 17. Sala “A”.

Buenos Aires, de junio de 2023.

VISTOS:

El recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público Fiscal interviniente ante la instancia anterior contra la decisión del señor juez titular del juzgado “*a quo*” de “...**DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL, POR PRESCRIPCIÓN, RESPECTO DE GERMÁN ALBERTO FERRANDO** y, en consecuencia, **SOBRESEERLO en orden al hecho objeto de autos...**”.

El escrito por el cual el señor fiscal general que actúa ante esta instancia mantuvo el recurso de apelación al que se aludió por el párrafo anterior.

Los memoriales presentados por el representante del Ministerio Público Fiscal y por la defensa de Germán Alberto FERRANDO a los fines de informar en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N.

Y CONSIDERANDO:

1º) Que, por el pronunciamiento recurrido, el señor juez de la instancia anterior recordó “...*que el objeto de autos viene dado por la presunta evasión del pago del impuesto [al] valor agregado de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 por montos de \$ 1.617.230,35, \$ 2.486.593,37 y \$ 497.512,43 -respectivamente- y del impuesto a las ganancias de los ejercicios 2011, 2012 y 2013 por montos de \$ 2.695.383,94, \$ 4.144.322,29 y \$ 829.187,39 -respectivamente- utilizando personas interpuestas para ocultar la calidad de obligado tributario de [Diego Arnaldo] Dom[á]nico y de [Marta del Carmen] Gallardo por la actividad económica desarrollada con el nombre de fantasía y usuario de la plataforma Mercado Libre *ARGENPLAYER**; y, asimismo, en lo que respecta a las supuestas



#36176824#371441202#20230606105126299

evasiones del pago del impuesto al valor agregado, utilizando fraudulentamente el beneficio fiscal de la alícuota reducida del 1% prevista por la Resolución General AFIP no. 2955/2010 para percepciones efectuadas respecto de operaciones realizadas por responsables inscriptos en el impuesto al valor agregado que no registren observaciones, toda vez que los verdaderos titulares de la explotación [Diego Arnaldo] Dománico y [Marta del Carmen] Gallardo, siendo monotributistas y correspondiéndoles la alícuota del cinco por ciento (5%), se dieron de alta en el portal virtual Mercado Libre como usuario responsable inscripto utilizando los datos de Promisoria SRL y acompañando documentación falsa a tal fin.

*En el marco de la referida actividad económica desarrollada con el nombre de fantasía y usuario de la plataforma Mercado Libre *ARGENPLAYER* [continuó reseñando el señor juez “a quo”], al haberse utilizado el nombre y los datos de Promisoria SRL para realizar las ventas por internet en los años 2011, 2012 y 2013, se modificaron los registros del fisco nacional a partir de las percepciones a nombre de Promisoria SRL informadas al organismo por Mercado Libre SRL en su calidad de agente de percepción de IVA, generando así una apariencia falsa de deuda impositiva en cabeza de Promisoria SRL, a raíz de lo cual la sociedad fue objeto de una inspección de la AFIP; por lo que los hechos también se consideraron presuntamente constitutivos del delito de alteración dolosa de registros previstos por el Régimen Penal Tributario y del delito de estafa (art. 172 del CP) en grado de tentativa [“...en perjuicio de Promisoria SRL...” se indicó por el considerando 25° del auto de procesamiento dictado en el marco de la causa principal respecto de otros imputados]...”.*

Asimismo, el magistrado a cargo del juzgado de la instancia previa indicó que, con posterioridad a haberse dispuesto la citación de Germán Alberto FERRANDO en los términos del art. 294 del C.P.P.N., se dispuso, en el marco de las actuaciones principales, la producción de un peritaje contable y “...[a] partir de la tarea realizada, se establecieron los siguientes montos: Impuesto a las Ganancias 2011 \$172.268,35; Impuesto a las Ganancias 2012 \$330.007,31; Impuesto a las Ganancias 2013 \$33.703,22; IVA 2011 \$449.851,24; IVA 2012 \$822.722,73 e IVA 2013 \$124.090,91...”.

En ese sentido, sostuvo que “...los montos presuntamente evadidos en concepto de impuesto a las ganancias de los períodos 2011, 2012 y 2013 y de impuesto al valor agregado del ejercicio 2013 no superan los \$400.000 previstos como piso cuantitativo por la ley 24769 (modificada por la ley 26735)...”, asimismo expresó que “...toda vez que los montos





Poder Judicial de la Nación

presuntamente evadidos en concepto de impuesto al valor agregado de los ejercicios 2011 y 2012 no superan la suma de un millón quinientos mil pesos (\$1.500.000), según lo establecido en el art. 1 del nuevo Régimen Penal Tributario según el art. 279 de la ley 27430, ésta resulta más benigna que la ley 24769 -conforme su texto reformado por la ley 26735-...[por lo que] los sucesos mencionados ya no son encuadrables en ese delito...”.

En tales condiciones, concluyó “...en discrepancia con lo dictaminado por el fiscal, que los hechos de autos ya no pueden considerarse presuntamente constitutivos del delito de evasión tributaria, ni agravada ni simple, por lo que la posible prescripción de la acción penal debe ser analizada teniendo en cuenta las calificaciones remanentes, esto es, las del delito de alteración dolosa de registros previsto por el Régimen Penal Tributario y del delito de estafa previsto por el artículo 172 del Código Penal, éste último en grado de tentativa...”.

Después de precisar que, por existir “...calificaciones remanentes...” en las que podrían subsumirse los hechos, la situación debía analizarse desde las previsiones del art. 54 del Código Penal, el señor juez de la instancia previa expresó: “...la última percepción practicada por Mercado Libre SRL tuvo lugar el 4 de mayo de 2013 y, desde entonces hasta la fecha en la que se dispuso la convocatoria a prestar declaración indagatoria del imputado (24 de octubre de 2019), ha transcurrido un plazo que excede el de los seis años, sin que se verifique ningún otro acto interruptor del curso de la prescripción...”.

2º) Que, el Ministerio Público Fiscal por el recurso de apelación en examen se agravio de la decisión aludida precedentemente, “...especialmente [de] la valoración desarrollada en los considerandos 7º y siguientes...”, por cuanto, contrariamente a lo expresado por el señor juez a cargo del tribunal de la instancia previa, entiende “...**que los montos evadidos** [que deberían tenerse en cuenta a los fines de examinar la vigencia de la acción penal son los que se consideraron al momento de convocar a los imputados] **a prestar declaración indagatoria en los términos del art. 294 del CPPN, por lo que con relación a la prescripción de las acciones penales en danza, corresponde estarse a lo dictaminado por** [el Ministerio Público Fiscal] **en esta incidencia...**” (el resaltado corresponde a la presente).

Para sostener aquella afirmación, cuestionó los montos que se estimaron evadidos por el peritaje contable dispuesto en los autos principales, por cuanto sostuvo que por aquél “...no [se tuvo] en cuenta



*como lo hizo el fisco, la totalidad de las operaciones puestas en cabeza de Promisoria S.R.L., tomó sólo los retiros de dinero (las cuentas bancarias asociadas al usuario *Argenplayer* a través del portal de Mercado Libre para el retiro del dinero recaudado por las ventas realizada eran entre otras Servicios Integrales para Trading S.R.L., The Sucess Word y Asociación Mutual Tropea) lo cual no refleja necesariamente los ingresos, ya que no es el único medio de pago, además de permitir su canalización hacia otros destinos... ”.*

A lo expresado, agregó que “...la actividad económica tomaba distintas denominaciones ‘Argenplayer’, ‘The Sucess World’, Marta Gallardo, Domanico,...Omar Rene Martínez..., por lo que para el caso de entender que el grado de avance [de] la investigación permite poner en cabeza de una persona física los hechos imponibles, no puede dejarse de lado la totalidad de las maniobra[s] y las personas involucradas, con sus patrimonios, registros bancarios y contables, para su cuantificación... ”.

De tal manera, expresó que “...compartiendo lo manifestado por V.S. en cuanto a que la hipótesis delictual no puede reposar sino sobre un monto evadido que represente la verdad material en función de los extremos acreditados en la causa, difiero en cuanto a que las conclusiones de los peritos se revelan como las más ajustadas a la realidad económica y las que, por ende, deben ser consideradas a los efectos del examen de la cuestión aquí implicada... ”.

3º) Que, si bien el representante del Ministerio Público Fiscal, por el recurso de apelación en examen, no efectuó diferenciaciones respecto de los hechos presuntamente ilícitos por los cuales pretendería que, en esta instancia, se revierta la decisión del juzgado “a quo” dictada en el incidente, por la lectura de aquella impugnación se advierte que los agravios de la fiscalía se circunscriben únicamente a los montos tenidos en cuenta por el magistrado de la instancia anterior para afirmar que lo evadido presuntamente por el Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2011 y por el Impuesto a las Ganancias y el Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2012 no supera las sumas de las figuras calificadas del delito de evasión tributaria en las que se subsimieron aquellos hechos al tiempo de dictarse el auto de procesamiento de los imputados.

4º) Que, lo advertido a partir de la lectura del recurso de apelación se condice con el hecho de que, al contestar la vista que se confirió al Ministerio Público Fiscal en este incidente sobre la prescripción





Poder Judicial de la Nación

posible de la acción penal instada contra Germán Alberto FERRANDO, el señor fiscal interviniente ante la instancia anterior concluyó “...*que en el caso se habría extinguido la acción penal con relación al delito de evasión simple del impuesto al Valor Agregado 2011...*”, mientras que “...*en el caso de las imputaciones cursadas por las evasiones agravadas de los impuestos a las Ganancias periodos 2011 y 2012, e IVA periodo 2012, no ha transcurrido el plazo legal del máximo de la pena en expectativa, habiéndose interrumpido el plazo de la prescripción mediante el llamado a prestar declaración indagatoria ordenado por [el tribunal de la instancia anterior]...*”.

También, con el hecho de que, en el marco del mismo dictamen, el representante del Ministerio Público Fiscal manifestó: “...*la suma dejada de ingresar, por el período 2013 y con relación [al] Impuesto al Valor Agregado y a las Ganancias, quedaría por debajo de \$ 1.500.000, en ese sentido dicho accionar no sería típico según la actual redacción del artículo 1º del Régimen Penal Tributario Ley 27.430...*”.

5º) Que, no obstante lo reseñado por los considerandos 3º y 4º del presente, el señor juez titular del tribunal de la instancia previa concedió la impugnación del Ministerio Público Fiscal sin aclaraciones en orden a los hechos presuntamente ilícitos por los cuales se habilitaba la competencia de este tribunal de alzada.

6º) Que, “... ‘...*por el juego armonioso de los arts. 432 y 449 del ordenamiento adjetivo se establece que tiene derecho a recurrir aquél que tenga un interés directo y a quien la resolución apelada cause un gravamen irreparable.*

De aquellas normas surge que debe existir lo que técnicamente se denomina agravio. Esto significa que mediante la resolución cuestionada se desmejora o se contradice la expectativa de la parte, lo que equivale a afirmar una hipotética afectación al interés que se pretende hacer prevalecer. Se trata, en definitiva, de un perjuicio que se ocasiona al interés de la parte.

De este modo, se dice que interés y perjuicio integran el concepto de agravio. Asimismo, el gravamen debe consistir siempre en el padecimiento de un perjuicio efectivo, práctico y objetivo...’ (confr. Regs. Nos. 712/00, 304/12, CPE 27/2019/12/CA5, res. del 19/07/2019, Reg. Interno N° 523/2019 y CPE 1166/2019/2/CA1, res. del 10/03/2020, Reg. Interno N° 115/2020, entre otros, de [la] Sala ‘B’)...” (confr. CPE



1391/2019/1/CA1, res. del 29/09/2021, Reg. Interno N° 621/21, de la Sala “B” de esta Cámara, entre otros, y CPE 1561/2010/67/145/1/RH17, res. del 04/08/2020, Reg. Interno N° 236/20 y CPE 1561/2018/67/104/CA74, res. del 22/12/2020, Reg. Interno N° 330/20, de esta Sala “A”).

7º) Que, en este caso, en función de la secuencia de intervenciones del Ministerio Público Fiscal reseñada por los considerandos 2º y 4º de la presente, cabe estimar que lo decidido por el señor juez “*a quo*” implicó la adopción de un temperamento que, en cuanto al cierre eventual de la instrucción, se condice parcialmente con lo dictaminado en su momento por la fiscalía interviniente en la instancia previa, de modo que no puede entenderse que lo dispuesto por aquel pronunciamiento ocasione un gravamen a aquella parte en lo referente a los hechos que en su momento se estimaron presuntamente constitutivos del delito de evasión tributaria con relación al Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2011 y al Impuesto a las Ganancias y al Impuesto al Valor Agregado del ejercicio fiscal 2013 (confr., en sentido similar y entre otros, CPE 209/2017/4/CA2, res. del 16/03/18, Reg. Interno N° 136/18, de la Sala “B” de esta Cámara de Apelaciones, y el pronunciamiento por el cual la Cámara Federal de Casación Penal declaró inadmisibile el recurso de casación que el Ministerio Público Fiscal interpuso contra aquella resolución: C.F.C.P., Sala III, causa N° CPE 209/2017/4/CFC1, “*LABORDE, Roberto Pedro y otro s/ recurso de casación*”, rta. el 22/08/18, Reg. N° 1025/18).

8º) Que, por lo tanto, corresponde declarar parcialmente mal concedido el recurso de apelación deducido por el representante del Ministerio Público Fiscal interviniente ante la instancia previa en lo que se refiere a los hechos presuntamente ilícitos aludidos por el considerando anterior (confr. arts. 432, 433 y 444 del C.P.P.N.).

9º) Que, establecido lo expresado precedentemente, con relación a la cuestión de fondo objeto de análisis del presente incidente cabe recordar, en primer lugar, que el sobreseimiento es la resolución jurisdiccional por la cual se concluye el proceso definitiva e irrevocablemente con relación al imputado en cuyo favor se dicta, y encuentra fundamento en las causales taxativamente previstas por la ley. Por consiguiente, para el dictado de un pronunciamiento con aquellos alcances es necesaria la certeza del juzgador sobre la configuración de alguna de las causales previstas por el art. 336 del C.P.P.N. (confr. C.F.C.P., Sala I,





Poder Judicial de la Nación

“NAVARRO, JUAN MANUEL Y OTROS S/ RECURSO DE CASACIÓN”, rta. el 23/05/01; Sala III, “SAKSIDA, WALTER RAÚL S/ RECURSO DE CASACIÓN”, rta. el 18/2/00; Sala IV, “SANTOS, ENRIQUE JOSÉ S/ RECURSO DE CASACIÓN”, rta. el 22/11/99; y Regs. Nos. 634/03, 394/06, 463/06, 655/06, 719/06, 655/09, 399/19 y CPE 1652/2014/5/7/CA103, res. del 13/09/19, Reg. Interno N° 677/19, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 943/2010/27/CA7, rta. el 30/06/20, Reg. Interno N° 173/20, CPE 811/2017/5/CA1, res. del 15/02/2023, Reg. Interno N° 25/2023 y CPE 1060/2021/1/CA3, res. del 13/03/2023, Reg. Interno N° 61/23 de esta Sala “A”, entre otros).

10º) Que, toda vez que los cuestionamientos invocados por el Ministerio Público Fiscal giran en torno a los presupuestos de los que se partió para la elaboración del peritaje contable llevado a cabo en el marco de los autos principales y a las conclusiones a las que por aquel examen pericial se arribó, resultaría prematuro, en este momento de la pesquisa, establecer en forma definitiva la cuantía de las obligaciones impositivas presuntamente evadidas, aspecto que, en el caso, en función de la fecha en la que se dispuso la citación de Germán Alberto FERRANDO a prestar la declaración indagatoria, no puede ser soslayado al momento de definir la significación jurídica concreta que correspondería eventualmente otorgar a los hechos presuntos de evasión tributaria vinculados con el Impuesto a las Ganancias del ejercicio fiscal 2011 y el Impuesto al Valor Agregado y el Impuesto a las Ganancias del ejercicio 2012, a los fines de establecer si se ha extinguido por prescripción, o no, la acción penal (confr., en sentido similar, CPE 1652/2014/20/1/CA13, res. del 30/06/16, Reg. Interno N° 308/16; CPE 1652/2014/25/2/CA19, res. del 30/12/16, Reg. Interno N° 831/16; CPE 1652/2014/33/2/CA29, res. del 22/03/17, Reg. Interno N° 163/17; y CPE 1652/2014/18/2/CA34, res. del 23/10/17, Reg. Interno N° 719/17, de la Sala “B” de esta Cámara).

Esto es así, habida cuenta que los fundamentos en los cuales el juzgado *“a quo”* consideró que los sucesos de los que se trata *“...no pueden considerarse presuntamente constitutivos del delito de evasión tributaria, ni agravada ni simple...”* y *“...que la posible prescripción de la acción penal debe ser analizada teniendo en cuenta las calificaciones remanentes...”*, parten de una serie de circunstancias de hecho y de prueba que no pueden, en el actual estado de la investigación, considerarse insusceptibles de modificación futura a partir de la actividad probatoria y de las ponderaciones que, a instancias del Ministerio Público Fiscal, podrían llegar



a efectuarse con el objetivo de establecer la cuantía real de los montos presuntamente evadidos (confr., en sentido similar, CPE 1652/2014/32/1/CA42, res. del 06/12/2019, Reg. Interno N° 973/19, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara).

11º) Que, en el sentido expresado por el considerando que antecede, corresponde recordar que por numerosas decisiones anteriores este Tribunal ha expresado que para establecer el término de la prescripción de la acción en un proceso penal debe estarse a la sanción del delito más severamente penado de los atribuidos al inculpado y a la posible calificación más gravosa que razonablemente pueda corresponder (confr. en lo pertinente Regs. Nos. 380/07, 500/07, 564/07, 187/08, 746/09, 219/11, CPE 1130/2004/2/CA2, res. del 16/06/2016, Reg. Interno N° 287/16; CPE 1652/2014/33/2/CA29, res. del 22/03/2017, Reg. Interno N° 163/17 y CPE 1652/2014/49/4/CA40, res. del 8/11/2017, Reg. Interno N° 759/17, entre otros, de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 14/2008/341/CA45, res. del 04/10/2022, Reg. Interno N° 473/22 y CPE 763/2015/1/CA1, res. del 27/12/2022, Reg. Interno N° 630/22, de esta Sala “A”, entre otros).

12º) Que, en igual sentido se pronunciaron la totalidad de las salas de la Cámara Federal de Casación Penal. En efecto, se sostuvo: *“...para establecer el término de la prescripción de la acción en un proceso penal debe estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al inculpado y a la posible calificación más gravosa que razonablemente pueda corresponderle...”* (C.F.C.P., Sala I, “Lezcano José Guillermo s/rec. de casación”, Reg. N° 11297, rta. el 16/11/07); *“...Si la acción imputada puede configurar un delito u otro, debe estarse al de mayor gravedad para resolver el incidente de prescripción, sin perjuicio que una vez finalizado el juicio oral se concluya que corresponde al hecho una calificación más benigna, declarándose entonces la prescripción de la acción. No aplicar éste criterio podría llevar a declarar la prescripción de una causa por un hecho que posteriormente resulte un delito más grave a cuyo respecto no había corrido el término...”* (C.F.C.P., Sala II, “Parravicini, Rubén O Edgardo s/recurso de casación”, Reg. N° 7585.2, rta. el 06/05/05); *“...Si el hecho imputado puede prima facie configurar un delito u otro, debe estarse al de mayor gravedad en el incidente de prescripción, sin perjuicio que al tiempo del pronunciamiento definitivo resulte una calificación más benigna, declarándose entonces y recién allí la prescripción de la acción, luego del debate...”* (C.F.C.P., Sala II, “Brusa,





Poder Judicial de la Nación

Víctor Hermes s/ recurso de casación, Reg. N° 8105.2, rta. el 16/12/05); “...En el caso de autos, el a quo aplicó la nueva ley 25.990 y declaró la prescripción de la acción penal respecto de los imputados tomando como base la figura de insolvencia fraudulenta art. 179, segundo párrafo del C.P., calificación legal escogida por el Ministerio Público Fiscal al requerir la elevación de la causa a juicio, cuya pena máxima es de tres años de prisión. Sin embargo, en la resolución puesta en crisis no se consideró que la parte querellante en aquella oportunidad -art. 346 del C.P.P.N.- y al ofrecer prueba de conformidad con lo dispuesto en el art. 354 del mismo cuerpo legal, entendió que la significación jurídica que corresponde darle a los hechos es la de defraudación, insolvencia fraudulenta y falsedad ideológica de documentos públicos -arts. 172, 173 incs. 7° y 11, 179, 292, 300 y 301 del C.P.-, cuya pena mayor asciende a los seis años de prisión. Si la parte querellante se encuentra legitimada para acusar y recurrir autónomamente en el juicio oral, se extrae como lógica consecuencia que también se halla habilitada para proponer una calificación de los hechos diferente a la escogida por la fiscalía al requerirla elevación de la causa a juicio...” (C.F.C.P., Sala II, “Chammah, Sergio Mauricio y otro s/ recurso de casación”, Reg. N° 8560.2, rta. el 02/05/06); “...ante hipótesis normativas concurrentes, fundadas en presupuestos probatorios y jurídicos atendibles, debe privilegiarse hasta la instancia definitiva aquella que permita alcanzar una decisión final tras la consideración de todas las circunstancias del hecho imputado...” (CFCP, Sala II, “Camerini, Federico Vladimiro s/recurso de casación”, Reg. N° 14.185, rta. el 1/4/2009); “...para establecer el término de la prescripción de la acción en un proceso penal ha de estarse a la pena del delito más severamente reprimido de los atribuidos al justiciable y a la posible calificación más gravosa que razonablemente pueda corresponderle...” (CFCP, Sala III, “Rohor, Marta Gabriela o Marta Graciela s/rec. de casación”, Reg. N° 1748/10, rta. el 10/11/2010 -sin perjuicio que, en el caso, se estimó extinguida la acción penal por prescripción en virtud de la calificación menos gravosa pues la condición agravante invocada “...carecía en absoluto de una base fáctica que la sustente...”; “...Al resolverse el incidente de prescripción respectivo debe estarse a las calificaciones provisionales que rigen en ese momento. El magistrado debe atender a si la acción imputada puede configurar prima facie un delito u otro, debiendo en tal caso estarse al de mayor gravedad, sin perjuicio de que al tiempo del pronunciamiento definitivo, en los autos principales, se concluya en una significación jurídica más benigna, declarándose entonces la prescripción. Esto, claro está, siempre que se



respete la plataforma fáctica que resulte objeto del proceso. Es decir que al momento de resolver la prescripción de la acción penal, el juez tan solo debe constatar si la conducta imputada podría llegar a ser subsumida en otra calificación legal más gravosa, pero sin alterar la plataforma fáctica...” (C.F.C.P., Sala IV, voto de la señora juez de cámara Dra. Ana María CAPOLUPO de DURAÑONA y VEDIA, “Danzinger, Dando y otros s/ recurso de casación”, Reg. N° 7315.4, rta. el 17/03/06); y “...No debe olvidarse que el sobreseimiento, incluso cuando se dicta en virtud de la extinción de la acción penal, se resuelve en relación al hecho que ha resultado objeto de imputación en el proceso. De manera entonces que es ese sustrato fáctico mantenido con respecto al principio de congruencia, el que debe poder ser alcanzado por la calificación legal más gravosa si la acción imputada puede configurar prima facie un delito u otro, debe estarse al de mayor gravedad en el incidente de prescripción, sin perjuicio de que al tiempo del pronunciamiento definitivo, en el principal, se concluya en una significación jurídica más benigna, declarándose entonces la prescripción...” (C.F.C.P., Sala IV, “Correa Gustavo Adrián s/ recurso de casación”, Reg. N° 7417.4, rta. el 26/04/06) -confr. FSM 32009134/2012/108/CA22, res. del 15/02/2019, Reg. Interno N° 34/19, CPE 1360/2013/3/CA1, res. del 12/07/2019, Reg. Interno N° 480/19 de la Sala “B” de esta Cámara y CPE 14/2008/341/CA45, res. del 04/10/2022, Reg. Interno N° 473/22, de esta Sala “A”-.

13º) Que, por último, corresponde indicar que, contrariamente a lo manifestado por la defensa de Germán Alberto FERRANDO en la oportunidad prevista por el art. 454 del C.P.P.N., los agravios invocados por el recurso de apelación en examen, al menos por el momento, brindan sustento suficiente a la pretensión del Ministerio Público Fiscal de profundizar la investigación, en línea con lo establecido por el art. 193, incs. 1º y 2º, del C.P.P.N., a los fines de determinar, con la certeza necesaria, si los sucesos en cuestión podrían tener razonablemente un alcance mayor del que el juzgado “a quo” consideró por el pronunciamiento impugnado.

Por ello, **SE RESUELVE:**

I. DECLARAR ERRÓNEAMENTE CONCEDIDO el recurso de apelación interpuesto por el señor fiscal interviniente contra resolución por la cual se dispuso “...**DECLARAR EXTINGUIDA LA ACCIÓN PENAL, POR PRESCRIPCIÓN, RESPECTO DE GERMÁN ALBERTO FERRANDO**





Poder Judicial de la Nación

y, en consecuencia, *SOBRESEERLO...*” en orden a los hechos presuntos que dieron lugar a las imputaciones por el delito de evasión tributaria respecto del Impuesto al Valor Agregado correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y del Impuesto a las Ganancias y del Impuesto al Valor Agregado correspondientes al ejercicio fiscal 2013.

II. REVOCAR la resolución recurrida, por la cual se declaró, respecto de Germán Alberto FERRANDO, la extinción de la acción penal, por prescripción, que emerge de los hechos presuntos que dieron lugar a las imputaciones por el delito de evasión tributaria respecto del Impuesto a las Ganancias correspondiente al ejercicio fiscal 2011 y del Impuesto al Valor Agregado y del Impuesto a las Ganancias correspondientes al ejercicio fiscal 2012, y se dictó el auto de sobreseimiento del nombrado por aquellos sucesos.

III. SIN COSTAS (arts. 530, 531 y 532 del C.P.P.N.).

Regístrese, notifíquese, oportunamente comuníquese de conformidad con lo dispuesto por la resolución N° 96/2013 de superintendencia de esta Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y devuélvase digitalmente al Juzgado Nacional en lo Penal Económico N° 9, Secretaría N° 17.

JUAN CARLOS BONZON
JUEZ DE CAMARA

ROBERTO ENRIQUE HORNOS
JUEZ DE CAMARA

CAROLINA L.I. ROBIGLIO
JUEZ DE CAMARA

ANTE MÍ:

MARIA ALDANA PONCE
PROSECRETARIA DE CAMARA

Validez desconocida

Digitally signed by MARIA ALDANA
PONCE
Date: 2023.06.06 12:11:01 ART

Validez desconocida

Digitally signed by JUAN CARLOS
BONZON
Date: 2023.06.06 13:10:15 ART

Validez desconocida

Digitally signed by ROBERTO
ENRIQUE HORNOS
Date: 2023.06.06 14:40:58 ART

Validez desconocida

Digitally signed by CAROLINA
ROBIGLIO
Date: 2023.06.06 15:37:09 ART



#36176824#371441202#20230606105126299